

Hugo del Campo

*Argentina. 1955–2005.*

*Como el ave Fénix...*

## EL AUTOR

Hugo del Campo nació en Buenos Aires en 1941. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Enseñó en esa facultad y en las Universidades Nacionales de Lomas de Zamora, del Sur y de La Pampa entre 1966 y 1975. Encarcelado por “penetración ideológica” en esa última fecha, reanudó su actividad docente desde 1983 en las universidades de Paris IV – Sorbonne y Marne-la-Vallée (Francia).

Publicó *Los anarquistas* (CEAL, 1971); *Sindicalismo y peronismo. Los comienzos de un vínculo perdurable* (Clacso, 1983; 2ª edición Siglo XXI, 2005); *El “sindicalismo revolucionario” (selección de textos)* (CEAL, 1985); “Sindicatos, partidos ‘obreros’ y Estado en la Argentina preperonista” en Waldo Ansaldi y José Luis Moreno (comp.) *Estado y sociedad en el pensamiento nacional* (Cántaro, 1989; 2ª ed. 1996) y artículos en *Polémica, Documentos de Polémica, Historia del movimiento obrero, Historia de América en el siglo XX, Cuadernos del Sur y el Anuario de estudios histórico-sociales de la Universidad de Tandil*.

## NOTA PRELIMINAR

*Luis Alberto Romero*

Hacia 2006 le encargué a Hugo del Campo la preparación de un volumen sobre la historia argentina en la segunda mitad del siglo XX, destinada a una colección de alta divulgación, que dirijo. Hugo concluyó su tarea poco antes de fallecer. Para poder completar el volumen debíamos todavía resolver con él una serie de cuestiones y de ajustes. Sabíamos que, aunque eran cuestiones menores, no sería fácil llegar a un acuerdo, pues Hugo defendía con firmeza sus puntos de vista. Por eso decidimos que, sin su participación y autorización, no sería apropiado publicarlo. Sus amigos, y particularmente María Dolores Béjar, queremos que su texto, muy valioso, sea conocido.

## DIÁLOGO CON HUGO AL CALOR DE ESTE LIBRO

*María Dolores Béjar*

Hugo del Campo pensó y escribió este libro en tres sitios: en Vejer de la Frontera, a un paso de África, en Buenos Aires y, básicamente, en París. Por esos azares que atraviesan la historia, la propuesta llegó casi con su jubilación y Hugo se sumergió, serena y apasionadamente, en el pasado reciente de la Argentina. Aceptó comprarse una notebook. Hasta ese momento, en cada encuentro me aseguraba: “jamás dejaré mis cuadernos, mi lapicera fuente, mi máquina de escribir” pero, como le anticipé, acabó no pudiendo prescindir de la misma.

Trasladó una gran cantidad de libros a su departamento parisino y consultó con gusto la prensa vía internet. Casi nunca me comentó sus notas e impresiones sobre el pasado más remoto. Sólo lo hizo cuando me anunció el inicio de su tarea en enero de 2007 con un comentario que deseo compartir: “Estoy tratando de explicar que en 1955 *democracia* significaba proscripción de la mayoría; *nacionalismo*, anti liberalismo; *liberalismo*, antiperonismo (lo que no implica que los *nacionalistas* fueran peronistas...) Para aclarar esos galimatías me inventé un lector extranjero -o demasiado joven- al que me dirijo cada vez que una palabra no significa lo mismo en la Argentina y en el resto del mundo. Así, por ejemplo, le explico que para los militares argentinos *comunista* es lo que en países menos advertidos se llama *progresista*, lo que me permite contar -que no explicar- que fue el *comunista* Frondizi el que prohibió el PC (que, por otra parte, lo había votado) Y a medida que me interno en esos laberintos me dan ganas de cambiar el enfoque y el título del libro en el sentido del *asunto*, por ejemplo: Una historia surrealista de la Argentina” .

Sus correos comenzaron a llegar con frecuencia a medida que cotejaba evaluaciones y especialmente apuntaba datos cuantitativos sobre el

gobierno de Néstor Kirchner.

Hugo nunca fue peronista ni antiperonista. Siempre se posicionó en el campo de la izquierda. Nuestra única discusión fue en París cuando lo visité en el 2008, poco antes de su muerte: a partir de mi comentario escéptico sobre la revolución bolchevique, sus ojos se entrecerraron y su voz se tensó para *golpearme* con un: “¿te estás volviendo una posmoderna?”

El gobierno de Néstor Kirchner lo sorprendió en relación con lo que su recopilación de números mostraba respecto a los avances en materia social y económica. Al mismo tiempo, observaba con lucidez las limitaciones de un proceso en el que “como a fines del siglo XIX seguimos dependiendo de los ciclos del capitalismo mundial” .

Por fin empezó a sentirse reparado por sus cinco años de cárcel donde estuvo, luego de haber sido secuestrado, por haber propuesto en la Universidad de Bahía Blanca en 1974 un programa de Historia Contemporánea que un juez de la dictadura militar calificó como “subversivo” . En todas sus manifestaciones Hugo fue medido, equilibrado. Pero la puesta en marcha de los juicios a los responsables del terrorismo de Estado le produjeron una gran sorpresa ya no lo esperaba y un enorme reconocimiento de la decisión de Néstor Kirchner.

Así como no fue peronista tampoco fue kirchnerista, pero en mayo del 2008 cuando los representantes de los grupos rurales se reunieron en Rosario en una enorme movilización para rechazar el aumento de las retenciones, cuando ambos leíamos los diarios desde su PC en París, Hugo exclamó: “tanto tiempo estudiando historia argentina y recién en este momento empiezo a entender el golpe del 55, ahora sé que no hubiera estado entre quienes lo celebraron, si no entre quienes tuvieron bronca y dolor” .

Cuando lo dejé en París a fines de mayo, le restaban las últimas correcciones. Hugo se fue a Vejer para concluir el trabajo y en julio de 2008 le puso punto final. Su muerte impidió que este libro integrara

la colección para la que fue pensado. Nuestra iniciativa de hacerlo circular en la web hará posible que alumnos, docentes, lectores en general, puedan sumergirse en un texto comprometido, lúcido, escrito al calor de los hechos. Hugo no dudó en debatir consigo mismo y cuando evaluó que fuentes históricas confiables le exigían extraer conclusiones distintas a sus creencias aceptó ser fiel a su labor como historiador.

## INDICE

Prólogo

Introducción

### I. El descenso a los infiernos

¿Qué hacer con el peronismo?

Gobiernos bajo tutela

Botas sí, votos no

Peronistas contra peronistas

El Estado terrorista

### II. Una difícil reconstrucción

Democracia con hiperinflación

Peronismo de mercado

Cacerolazos y puebladas

La caja de sorpresas

Epílogo

Anexos

Abreviaturas

Presidencias

Cronología

Bibliografía

## PRÓLOGO

En 1955, yo tenía catorce años y empezaba a interesarme por la política. En mi casa eran antiperonistas, y cuando hablaban de política en el comedor que daba a la calle, me mandaban a la vereda para vigilar que nadie escuchara. En el colegio, los chicos de la Acción Católica llevaban en la solapa una cruz con la V de la victoria, símbolo de Cristo Rey. Un día, mi hermano me mostró con mucho sigilo una hoja de papel doblada en múltiples pliegues para que no abultara en el bolsillo: era un periódico radical, el primero que yo veía. De pronto, en los últimos meses del gobierno peronista, una apertura permitió el acceso de dirigentes opositores a la radio: conocí entonces las voces de Frondizi y otros. Poco después, empecé a leer *Propósitos*.

Desde entonces, mi vida fue más o menos arrastrada por los vaivenes de la política argentina hasta que, en 1975, mis clases de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional del Sur me llevaron a la cárcel. Al salir, seis años después, me radiqué en Europa. Desde 1983 volví todos los años al país, tratando de mantenerme al tanto de lo que ocurría.

Es por eso que, cuando me propusieron la preparación de este libro, lo acepté sin demasiada vacilación. Más que el desafío intelectual de intentar sintetizar en tan pocas páginas un período tan complejo, lo que me atraía era la posibilidad de reconstruir el marco político en el que se desarrolló mi propia vida, una especie de confrontación entre mi memoria y la bibliografía, entre el hecho vivido, por un lado, y visto con cincuenta años de perspectiva, por otro.

El proyecto también me interesó por su carácter en gran medida pedagógico. Desde que empecé a trabajar como maestro, a los dieciocho años, nunca dejé de enseñar. En el nivel primario, secundario, universitario, incluso en la cárcel daba cursos a mis compañeros cuando



era posible... A través de estas páginas intentaré continuar con esa labor docente de toda la vida.

De modo que esos son los dos objetivos de este libro: reconstruir las condiciones políticas en que se desarrolló la vida de un argentino en la segunda mitad del siglo XX y tratar de explicar su evolución.

Más habituado a dar clases que a escribir, algo me faltará en este recorrido: las preguntas de los estudiantes, sus comentarios, el diálogo... Sin embargo, creo que toda lectura es, en realidad, un diálogo imaginario entre el lector y el autor y espero que el que se entable a partir de estas líneas sea fructífero.

Agradezco los comentarios de Luis Alberto Romero, que me ayudaron a tratar de mejorar este texto.

*Vejer de la Frontera, septiembre de 2007*

## INTRODUCCIÓN

La época que estudia este libro incluye los años más agitados y violentos de la historia argentina reciente, de 1955 a 1983, y la difícil reconstrucción que se inicia desde entonces. Pese a profundas recaídas, como la que tuvo lugar en 2001 y 2002, pareciera que el país renace de sus cenizas... como el ave Fénix.

### Cuesta abajo

En los veintiocho años del primer periodo se suceden dieciséis presidentes: siete constitucionales y nueve *de facto*. Los gobiernos elegidos por votación duran, en total, once años; los gobiernos militares, diecisiete. Sólo uno de esos mandatarios (Jorge Rafael Videla) permaneció más de cuatro años en su puesto. Ningún presidente civil terminó su mandato constitucional; tres fueron derrocados por golpes de estado militares.

Estos datos escuetos ilustran tres de las principales características del periodo: la fuerte inestabilidad política, la alternancia de gobiernos civiles elegidos y dictaduras militares y el predominio de los gobiernos *de facto*.

### *Un sistema corporativo*

En la primera parte de este libro explicaremos el desarrollo de ese proceso. Pero hay un aspecto esencial que es preferible señalar ya desde el comienzo: la incapacidad del sistema político argentino para integrar al peronismo entre 1955 y 1973.

La experiencia del gobierno peronista (1946-1955) había dividido al país en dos campos inconciliables. Los sectores más pobres y numerosos de la población recordaban al gobierno peronista como el único que se

había interesado realmente por sus problemas y que había mejorado de manera sustancial sus condiciones de vida. El retorno de Perón al país y al gobierno era entonces su máxima aspiración, vivida muchas veces en forma dramática ( “La vida por Perón” ).

En cambio, para otros sectores de la sociedad argentina (de clase alta y media en especial) el gobierno peronista había sido una dictadura personalista que reprimió toda forma de oposición y utilizó el monopolio de los medios de comunicación en manos del estado para abrumar a la sociedad con una propaganda masiva. El apoyo popular de que gozaba el peronismo era considerado producto de esa demagogia desenfrenada y se traducía, según estos sectores, en un culto a la personalidad, incompatible con los valores republicanos.

Para la mayoría de los empresarios, en particular, el peronismo significaba altos salarios obtenidos por los poderosos sindicatos con el apoyo del gobierno, que limitaban sus beneficios y aumentaban los costes de producción, y que hacían sus productos poco competitivos en los mercados exteriores. Dentro de la fábrica o el taller, el poder de las comisiones internas y de los delegados desafiaba la autoridad de la gerencia sobre la organización del trabajo y sus ritmos, y esa “indisciplina” -según esos empresarios- no permitía desarrollar la racionalización ni la productividad. Por todos los medios había que evitar, entonces, el retorno del peronismo, y el medio más efectivo era el poder militar: minoritario en la sociedad, el antiperonismo había llegado a predominar en las fuerzas armadas desde 1955.

Esta posición se impuso con la autodenominada “revolución libertadora”, y se dio entonces la paradoja de que, para defender a la *democracia* contra la *dictadura de la mayoría*, el peronismo fue proscripto.

Borrado del sistema político, volvió entonces a sus orígenes y se refugió en las organizaciones sindicales. Importantes en aquella época debido al número de sus afiliados, sus recursos financieros y su

capacidad de presión y de movilización, éstas se convirtieron así en la *columna vertebral* del peronismo y uno de los actores principales del sistema político. Podían ser la principal base de sustentación de un gobierno, como el de “Isabel” Perón, o contribuir decisivamente a voltearlo, como ocurrió con el de Arturo Illia. Las organizaciones sindicales eran los interlocutores obligados de las asociaciones patronales y de cualquier gobierno, civil o militar. Además, a partir de los sindicatos se constituyó una poderosa burocracia con intereses propios, algunos de cuyos miembros llegaron a figurar entre los principales actores de la política nacional (Augusto Timoteo Vandor, por ejemplo).

Frente a estas poderosas corporaciones, los sectores económica y socialmente dominantes recurrieron, para imponer sus intereses, a la alianza con otra corporación, a la que los unían múltiples vinculaciones: las fuerzas armadas. Éstas se convirtieron así en el otro actor fundamental del sistema político. Cada vez que un gobierno apoyado por los sindicatos amenazaba –o no defendía en forma eficaz– los intereses de las clases dominantes, las fuerzas armadas lo deponían (Juan Domingo Perón en 1955, “Isabel” Perón en 1976). Los gobiernos civiles que no eran capaces de impedir el triunfo –real o potencial– del peronismo, también fueron depuestos (Arturo Frondizi en 1962; Arturo Illia en 1966). Pero cuando llegaba el momento de las elecciones eran los candidatos apoyados directa o indirectamente por el peronismo los que se imponían: Arturo Frondizi en 1958, Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón en 1973. Sobre esta dialéctica se teje la trama política del periodo.

A lo largo de estos años, los sectores económicamente dominantes no pudieron organizar una fuerza política capaz de batir al peronismo en las urnas; entonces, defendían sus intereses directamente, a través de sus organizaciones corporativas, o indirectamente, a través de su alianza con gobiernos militares. Sólo éstos permitían aplicar políticas económicas impopulares que favorecían al gran capital nacional y

extranjero y limitaban las conquistas alcanzadas por los trabajadores. La Iglesia es la otra corporación que, en defensa de sus propios intereses, solía acompañar a esos gobiernos militares, y podía desempeñar un papel político decisivo, como ocurrió con la caída de Perón en 1955.

En este sistema, dominado por las corporaciones, los partidos políticos sólo tenían un papel secundario: prácticamente se limitaban a encauzar los votos -en unas elecciones viciadas, hasta 1973, por la proscripción del peronismo-, y a animar las instituciones representativas en los breves periodos de vigencia de la constitución.

Frente a esta reiterada alternancia de gobiernos civiles débiles y dictaduras militares, ningún proyecto reformista parecía viable. Ante ese callejón sin salida, eran cada vez más los que pensaban que sólo la violencia revolucionaria podía enfrentar a la violencia represiva y cambiar una sociedad injusta.

### *Una espiral de violencia*

Desde 1955 se produjo, entonces, un incremento permanente de la violencia política que, aunque no era nueva en la Argentina, alcanzó niveles inusitados. En junio de ese año, el bombardeo de la Casa Rosada (y de la Plaza de Mayo en horas de afluencia) por parte de aviones de la marina fue el procedimiento elegido para desalojar al presidente del poder y dejó un saldo de trescientos muertos civiles. Esa misma noche fueron saqueadas e incendiadas la Curia metropolitana y varias iglesias del centro de Buenos Aires, sin que la policía hiciera nada por impedirlo.

Al año siguiente, el fusilamiento del general Valle y de otros militares peronistas que preparaban una sublevación reintrodujo una práctica en desuso desde mediados del siglo XIX. Al mismo tiempo, los fusilamientos clandestinos, en los basurales de José León Suárez, de

civiles comprometidos -o no- con el alzamiento, constituyeron una primera manifestación de terrorismo estatal. Bombas artesanales y sabotajes fueron la respuesta de la resistencia peronista.

Desde 1966 se estableció una dictadura militar que reprimió a trabajadores, estudiantes, intelectuales... y que provocó estallidos de protesta, como el cordobazo y el rosariazo.

En ese contexto de violencia represiva, comenzaron a aparecer los grupos guerrilleros. En 1959 los Uturuncos inauguraron el primer esbozo de guerrilla rural en Tucumán. El secuestro y la ejecución -o asesinato- de Aramburu -según el punto de vista- señaló la aparición pública de Montoneros en 1970. Poco después, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) creó su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Después de la “ejecución” del simbólico Aramburu, los militantes de origen peronista eliminaron figuras claves de la burocracia sindical: Augusto T. Vandor, José Alonso, José Ignacio Rucci... Por su parte, el ERP intentó crear un “foco revolucionario” en los montes tucumanos, atacó cuarteles y asesinó también a decenas de jefes militares.

En este contexto, el enfrentamiento entre distintas vertientes del peronismo (la llamada “tendencia revolucionaria” y la burocracia sindical) se tradujo en la masacre de Ezeiza, en el momento del arribo de Perón al país. Más tarde, en el ministerio de Bienestar Social a cargo de José López Rega, se organizó la Triple A, que en los años siguientes asesinará a centenares de dirigentes de izquierda, especialmente peronistas.

La ideología militar, centrada hasta entonces en la doctrina de la seguridad nacional y las fronteras ideológicas -según la cual el enemigo era el comunismo y su probable antesala, el peronismo- encontró en esa violencia generalizada el pretexto para evolucionar hacia la contra-insurgencia, articulada a partir de la idea de un enemigo mucho más peligroso y omnipresente: la denominada “subversión”. Por ella se

entendía cualquier tipo de cuestionamiento al orden económico, social o político existentes; cualquier tipo de organización popular o de pensamiento crítico. Así concebida, la *subversión* parecía infiltrada en toda la sociedad y se entendía que sólo podía ser eliminada con una operación de gran envergadura. Según este discurso, la *civilización occidental y cristiana* sólo podía ser salvada a costa de un genocidio.

Desde 1975, las fuerzas armadas pusieron en práctica esa ideología: además de liquidar a los grupos armados y sus organizaciones de superficie, asesinaron a dirigentes sindicales combativos, delegados de fábricas, organizadores barriales, militantes estudiantiles, intelectuales críticos, artistas y sacerdotes comprometidos, abogados defensores de presos políticos... Miles de desaparecidos, presos políticos, exiliados: era, para los militares, el “Proceso de reorganización nacional”, la llamada “guerra sucia” contra la *subversión*; para sus víctimas y para gran parte de la sociedad argentina, era una forma de terrorismo de estado.

Aplicada en forma masiva, esta represión generalizada contribuyó a silenciar toda posible reacción de la sociedad, con muy pocas excepciones. Al principio, sólo las Madres de Plaza de Mayo se atrevieron a testimoniar su dolor e indignación, acompañadas después por los otros organismos defensores de los derechos humanos. Esta paralización de la sociedad permitió la ejecución de una política económica igualmente drástica, que destruyó sectores enteros de la economía argentina y alteró sustancialmente la estructura social. Porque allí estaban - para estos militares y sus aliados- las raíces de la subversión.

Finalmente, ante la creciente impopularidad y el aislamiento internacional de la dictadura, el régimen intentó un manotazo de ahogado para perpetuarse: la guerra de Malvinas. Tras el fracaso, totalmente desacreditado, el gobierno militar debió finalmente retirarse, dejando un país económica y socialmente devastado.

### *Remontando la cuesta*

El periodo que se inicia entonces contrasta fuertemente con el anterior. Todos los gobiernos que se suceden son constitucionales; casi todos terminan su mandato: aunque Raúl Alfonsín debe anticipar la entrega del gobierno, sólo Fernando De la Rúa se ve obligado a renunciar, ante la presión de la calle. No hay golpes de estado ni dictaduras militares. Dos gobiernos entregan el poder a un sucesor del partido rival, cosa que no ocurría desde 1916. La corporación sindical y la militar pierden su protagonismo; la Iglesia es la única que conserva intacta su influencia, junto con los *lobbies* empresarios. Los partidos políticos recuperan las funciones que les atribuía la tradición liberal, encauzando la participación de la ciudadanía en el gobierno, y el sistema democrático es revalorizado por la sociedad como base fundamental de la convivencia.

La represión estatal no es sistemática, aunque las protestas de diciembre de 2001 se saldaron con treinta y dos muertos. La única acción de un grupo armado es el ataque al cuartel de La Tablada, en 1989. Parece que, por primera vez desde 1930, funcionara realmente el sistema democrático-liberal. Claro que la instalación de ese sistema no fue fácil. Después de tantos años de proscripción y dictaduras, con experiencias democráticas tan breves, se trataba de reinventar un sistema político que prácticamente no había existido en la Argentina durante los últimos cincuenta años. Ése fue el gran logro del gobierno de Alfonsín.

No pudo resolver, en cambio, la situación económica: la gigantesca deuda externa heredada del “poceso” no hizo más que aumentar durante las décadas siguientes y se convirtió en el principal obstáculo que impedía el crecimiento de la economía. La inflación crónica y elevada desembocó en picos hiperinflacionarios en 1989 y 1990: sólo Carlos Menem y Domingo Cavallo lograron controlarla.



### *La cuadratura del círculo*

El repliegue de las fuerzas armadas y su desaparición de la escena política dejó al gran capital nacional y extranjero sin su *partido* preferido. Pronto encontrará, sin embargo, un reemplazante, con la ventaja adicional de que éste es capaz de ganar las elecciones puesto que lleva la etiqueta “peronista”. En el periodo anterior, habían sido principalmente las dictaduras militares las que impusieron la ortodoxia liberal, la preferida del *establishment*, a través de ministros como Álvaro Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. En este periodo, en cambio, las políticas neoliberales se concentraron sobre todo en el gobierno constitucional de Carlos Menem.

Estas políticas estaban por entonces de moda en el Primer Mundo (Ronald Reagan en los Estados Unidos; Margaret Thatcher en Gran Bretaña) y eran predicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Menem fue su *mejor alumno*.

Se trataba de *achicar el estado* mediante la privatización de sus empresas y el abandono de muchas de sus funciones; de *desreglamentar* la economía, dejando actuar a las leyes del mercado; de eliminar la protección de la industria nacional abriendo la puerta a las importaciones. Lo que permitió a Menem aplicar estas políticas conservando la mayoría electoral fue sobre todo el éxito de su ministro de economía, Domingo F. Cavallo, contra el principal enemigo de los argentinos en ese momento: la inflación. La *convertibilidad* (paridad 1 peso- 1 dólar) permitió controlarla o, al menos, dejarla en estado latente. Teniendo en cuenta la hiperinflación con que terminó el gobierno de Alfonsín y empezó el gobierno de Menem, eso significó un respiro para todos.

Pero las consecuencias negativas de esas políticas no tardaron en manifestarse. El peso, sobrevaluado, que dificultaba las exportaciones y estimulaba las importaciones, perjudicaba a muchos sectores y

aumentaba el déficit de la balanza comercial. Una vez privatizada la mayoría de las empresas estatales, las divisas que entraban para pagarlas y que compensaban en parte ese déficit iban disminuyendo. La concentración y centralización del capital en manos de grandes grupos argentinos y extranjeros, así como la importación masiva de bienes de consumo manufacturados producían la desaparición de gran número de pequeñas y medianas empresas nacionales. La utilización de nuevas tecnologías en las grandes empresas multinacionales reducía la necesidad de mano de obra y la denominada “racionalización” de las empresas estatales y privatizadas se traducía en despidos masivos. Todo esto provocaba un rápido incremento de la desocupación, que alcanzaría a más del 18 por ciento de la población activa en 1996.

Lejos del *primer mundo* prometido, el país se iba acercando rápidamente al tercero, con un aumento de la exclusión y la pobreza en los sectores sociales y geográficos que quedaban al margen de la modernización. En este contexto, la Alianza formada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (Frepasso) centró su campaña en la denuncia de la corrupción del gobierno menemista, pero muchos de los votos que recibió traducían el descontento de amplios sectores ante las consecuencias sociales del modelo neoliberal. La insistencia del gobierno de De la Rúa en mantener y ampliar las políticas *de ajuste* agravaron aún más la situación social, y el “corralito” ideado por Cavallo para salvar a los bancos fue vivido por muchos de los pequeños ahorristas afectados como una expropiación de sus depósitos. Entonces, se produjo el estallido. Cacerolazos y saqueos de supermercados obligaron a De la Rúa a renunciar y desembocaron en un peligroso vacío de poder y el descrédito del conjunto de la clase política: “que se vayan todos” .

En ese marco tuvo lugar la declaración del *default*, es decir, la cesación del pago de la deuda externa, y el país quedó afuera de los circuitos financieros internacionales. 2001 fue el año en que la crisis económica y social tocó fondo. El abandono de la convertibilidad, con

una fuerte devaluación, precedida por una gigantesca fuga de capitales, implicó una colosal transferencia de riqueza que profundizó el abismo entre los sectores privilegiados y los desfavorecidos.

### *Impunidad o justicia*

Otro factor que haría peligrar la estabilidad del nuevo sistema fue una herencia de la última dictadura militar, que atravesó todo el periodo democrático. La cuestión que se planteaba era qué hacer con los crímenes cometidos durante el “proceso” .

Para la casi totalidad de los militares –ya sea porque participaron en el terrorismo de estado o, en el caso de los más jóvenes, por espíritu de cuerpo– el problema no era tal: aunque “sucio”, había sido una guerra, la habían ganado, y un ejército vencedor no tiene que rendir cuentas a nadie. La mayor parte de la derecha compartía este punto de vista o consideraba, al menos, que era un tema superado y que agitarlo impedía mirar hacia delante.

Para los familiares y amigos de los desaparecidos, para quienes fueron torturados o pasaron años en la cárcel o, en general, para los que veían el asunto desde un punto de vista ético, se trataba en cambio de una cuestión de justicia. La reconstrucción de una convivencia democrática no podía basarse en la impunidad; los organismos defensores de los derechos humanos y los partidos de izquierda compartían esta posición.

En este marco, Raúl Alfonsín hizo de la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos y el juicio a los culpables uno de los temas claves de su campaña electoral. Una vez en el gobierno, promovió la formación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y el juicio a los miembros de las juntas militares que habían gobernado durante el “proceso” . Eso produjo agitación y un

estado deliberativo en las fuerzas armadas, que se tradujeron en las rebeliones militares de la Semana Santa de 1987, de Monte Caseros y Villa Martelli en 1988; aparecieron entonces los denominados “carapintadas”. Ante la amenaza que estos movimientos representaban para la estabilidad del sistema democrático, el gobierno cedió a las presiones y dictó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, interrumpiendo los juicios.

Sin mayores escrúpulos éticos, Carlos Menem fue más lejos, decretando el indulto de los militares condenados por violación de los derechos humanos o por rebelión después de 1983. Con estas medidas, parecía que la impunidad había triunfado.

Sólo durante el gobierno de Néstor Kirchner se anularon las leyes de impunidad y el indulto, y se reanudaron los juicios. Pero el secuestro de Jorge Julio López, testigo en uno de esos procesos, muestra la capacidad de acción que conservan todavía algunos grupos remanentes y su decisión de impedir que se haga justicia.

### *La caja de sorpresas*

Luego de cuatro elecciones presidenciales en las que se destacaba una clara mayoría (Alfonsín, Menem durante dos periodos, De la Rúa), la crisis política de 2001 y 2002 produjo la fragmentación de los grandes partidos tradicionales y la dispersión del electorado. En las elecciones de 2003, tres candidatos se presentaron con la apelación “peronista”; otros tres eran radicales o ex radicales. El candidato más votado, Carlos Menem, no recibió más que un 24 por ciento de los votos. Como no se presentó a la segunda vuelta, asumió la presidencia el candidato que le seguía en número de votos, el poco conocido Néstor Kirchner, quien había obtenido un 22 por ciento.

Los primeros actos del presidente fueron tan inesperados como su elección: pase a retiro de las cúpulas militares, depuración de la

Corte Suprema menemista, anulación de las leyes de impunidad y reanudación de los juicios. Ya pocos esperaban, después de veinte años, que se hiciera justicia.

Finalmente, otra sorpresa, cuyo responsable no fue únicamente Kirchner, sino también el ministro de economía nombrado por Eduardo Duhalde durante su breve presidencia, y mantenido por su sucesor: Roberto Lavagna. ¡El año 2004 cerró con superávit en las cuentas nacionales! Esto se debía al auge de las exportaciones, consecuencia de la fuerte demanda y de los buenos precios de los cereales y el petróleo en el mercado mundial, e impulsadas por la devaluación y el mantenimiento de un tipo de cambio favorable. El estado, por su parte, participó de esos ingresos a través de las retenciones, y es así como el habitual déficit presupuestario se transformó en excedente. Esto permitió que el estado volviera a invertir (Plan Nacional de Obras Públicas, Plan Federal de Construcción de Viviendas), contribuyendo así a la reactivación de la economía.

Desde el año anterior se había recuperado una tasa considerable de crecimiento económico, aumentando también los ingresos fiscales a través de los impuestos internos. Esto permitió al gobierno pagar sus deudas al FMI, liberándose así de su molesta tutela, y canjear la deuda externa privada en condiciones favorables. Asimismo, la disminución de la desocupación permitió a los trabajadores mejorar sus salarios de convenio, mientras que el gobierno aumentó el salario mínimo y el monto de las jubilaciones, apoyando así la recuperación del mercado interno.

Claro que queda pendiente, todavía, la *deuda social*. Aunque en disminución, el número de pobres e indigentes, consecuencia en gran medida de la perduración del trabajo en negro y de los bajos salarios, continúa siendo inaceptable.

Pero, como en 1973 y en 1983, en 2003 la esperanza renace. Sólo el tiempo dirá si sus fundamentos son más sólidos que entonces.

# I. EL DESCENSO A LOS INFIERNOS

Con la caída del peronismo comienza un proceso de deterioro político y social que culminará con el baño de sangre de 1975 a 1983; de ahí el título de esta primera parte.

Por cierto, la Argentina de 1955 distaba de ser un paraíso. La concentración del poder en manos de Perón volvía ficticias las formas constitucionales: tanto el parlamento como la justicia estaban totalmente subordinados al Poder Ejecutivo. Las libertades individuales estaban limitadas, legalmente, por la vigencia del *estado de guerra interno*, pero sobre todo, de hecho, por la acción intimidatoria de la policía. Casi toda la prensa escrita estaba en manos del estado o de personajes cercanos al régimen: clausurada *La Vanguardia*, expropiada *La Prensa*, el único diario no oficialista, *La Nación*, dependía de la asignación de cuotas de papel cada vez más mezquinas. El estado controlaba también todas las radios y la televisión: la oposición no tenía acceso a ellas.

La Confederación General del Trabajo (CGT), utilizada para controlar el movimiento obrero desde arriba, se había convertido en una correa de transmisión de las decisiones presidenciales. *La razón de mi vida*, de Eva Perón, era libro de lectura obligatorio en las escuelas primarias; en las secundarias, se aprendía la *Doctrina Nacional*. La figura de desacato al presidente permitía encarcelar a una persona por sus expresiones. En 1954, la asociación de abogados radicales censaba seiscientos ochenta y dos presos políticos y gremiales. Era, en suma, la *dictadura*, la *segunda tiranía* de la que hablaba la oposición (comparándola con la de Rosas), o aun el régimen *nazi-peronista*, *mala copia del fascismo europeo*, como también se lo denominaba.

La violencia verbal no era rara en los discursos de Perón, y a veces era seguida por la violencia física de sus partidarios. Por ejemplo, el 15 de abril de 1953, ante el estallido de dos bombas en un acto en la Plaza de Mayo, Perón –desde los balcones de la Casa Rosada– amenazó con “andar con el alambre de fardo en el bolsillo” e incitó a “dar

leña”. Esa noche ardieron la Casa Radical, la Casa del Pueblo, socialista, y el Jockey Club. La policía detuvo a centenares de sospechosos de participar en el atentado terrorista, entre ellos Ricardo Balbín y Victoria Ocampo.

Sin embargo, para la mayoría de la población –según se manifestaba en elecciones periódicas y limpias– nada de eso tenía importancia. Totalmente identificada con el gobierno *del pueblo*, no sólo no sufría esas restricciones sino que justificaba su aplicación a los *contreras*. En las elecciones de 1954 el peronismo obtuvo el 62 por ciento de los votos.

En esos años, la Argentina era un país próspero, el más rico de América Latina y uno de los más industrializados. Su sociedad era más homogénea y menos polarizada que la de casi todos sus vecinos, de los que la distinguían también los niveles alcanzados en salud y educación. Tenía la legislación social más avanzada de la región y una de las más avanzadas del mundo. La desocupación casi no existía, el trabajo en negro tampoco, y la mayoría de los trabajadores tenían salarios que les permitían vivir dignamente. Todos tenían acceso a la educación primaria, secundaria y, cada vez más, universitaria. Las obras sociales de los sindicatos y los hospitales públicos aseguraban servicios médicos de calidad al alcance de todos. Las comisiones internas y el apoyo de los organismos oficiales garantizaban el respeto del trabajador en sus lugares de trabajo y apuntalaban su sentimiento de dignidad. Todo esto se debía en gran medida a las políticas de Perón y explica el apoyo de los obreros y sectores populares a su gobierno.

Mientras tanto, en la Sección Especial de la Policía Federal y en las comisarías se continuaba practicando la tortura, como era habitual desde 1930. Sin embargo, después de su caída, Perón pudo afirmar que durante sus nueve años de gobierno sólo hubo un desaparecido: el Dr. Juan Ingalinella, militante comunista de Rosario, víctima de la tortura policial en 1955. Aunque podrían citarse otros casos, lo cierto es que



el régimen peronista no practicó el asesinato de opositores, que se generalizaría veinte años después.

### **¿Qué hacer con el peronismo?**

Desde 1952, el gobierno peronista enfrentó crecientes dificultades. En un contexto económico que empezaba a serle desfavorable, se notaba la escasa competitividad de una industria protegida y subsidiada, incapaz de exportar. La producción agropecuaria, desalentada por una política de moneda fuerte y por la relación de precios internos, se estancaba. Faltaban así las divisas necesarias para pagar las importaciones de materias primas, combustible y maquinarias indispensables para la industria. Los equipos se volvían obsoletos y, junto con el deterioro de los servicios (electricidad, transporte), reducían la productividad.

A falta de capitales que permitieran aumentarla introduciendo innovaciones técnicas, se puso el acento en la disciplina laboral reclamada por los patrones (ausentismo, poder de los delegados en el taller o la planta...), lo que fue sentido por muchos trabajadores como una restricción a sus conquistas. Para contener la inflación, se tomaron medidas tendientes a reducir el consumo (eliminación de subsidios, liberación de alquileres...) y se congelaron los convenios colectivos por dos años. No era lo que sus partidarios esperaban del gobierno.

Una ley de radicación de capitales favoreció las inversiones extranjeras y se negoció un contrato petrolero con una filial de la Standard Oil. Las relaciones con los Estados Unidos mejoraron considerablemente con el apoyo del gobierno argentino a las intervenciones norteamericanas en Corea y en Guatemala. Todo esto fue visto como un retroceso por los sectores nacionalistas dentro y fuera del peronismo.

Finalmente, en 1954, el gobierno peronista entró en conflicto con la

Iglesia, que lo había apoyado hasta entonces. La Fundación Eva Perón competía con las tradicionales instituciones católicas de beneficencia; la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) con sus organismos de encuadramiento de la juventud (Acción Católica); la fundación del Partido Demócrata Cristiano fue vista por Perón como un intento de competencia política. Poco dispuesto a escuchar las críticas, que comenzaban a manifestarse en los medios católicos, el gobierno respondió con una serie de medidas que desafiaban la influencia de la Iglesia en cuestiones claves: supresión de la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas públicas, autorización del divorcio vincular, reapertura de los prostíbulos. Finalmente, un proyecto de reforma constitucional preveía la separación de la Iglesia y el estado.

La Iglesia respondió movilizándolo todos sus recursos: a la campaña de los medios de comunicación oficialistas respondían los curas desde el púlpito y los laicos en la calle. Además de movilizar sus propias fuerzas -buena parte de las clases medias-, sirvió de aglutinante de toda la oposición (como pudo verse en la procesión de Corpus Christi el 8 de junio de 1955, en la que participaron, por ejemplo, socialistas y comunistas). Los partidos opositores no respondieron en forma favorable a la propuesta de *pacificación* lanzada entonces por Perón y esperaban -activa o pasivamente- el derrocamiento de su gobierno.

Perón advirtió entonces la debilidad de sus apoyos. El Partido Peronista (PP), edificado sobre la obsecuencia y la adulación, cuyos miembros parecían más empleados públicos que militantes, se mostró incapaz de mover un dedo para defender al gobierno en dificultades. La CGT, también burocratizada, aunque el 31 de agosto de ese mismo año reunió una multitud para rechazar el retiro de Perón, ante la inminencia del golpe no insistió en su ofrecimiento de reservistas voluntarios al ministro de ejército para hacerle frente. En cuanto al temido reparto de armas a los obreros con que se había amenazado alguna vez, nadie parece haber pensado en ello.

De modo que el destino del gobierno peronista estaba en manos de las fuerzas armadas. Éstas, que lo habían apoyado desde 1946, fueron pasando progresivamente a la oposición: relacionadas familiar y socialmente con las clases altas y medias antiperonistas, desconfiadas del papel central asignado a la CGT en el régimen, hostiles a la *peronización* del ejército, algunos militares ya habían intentado un golpe en 1951. Tres años después, el conflicto del gobierno con la Iglesia empujó a muchos militares católicos a tomar partido contra el peronismo.

*“Deben ser los gorilas…”*

Era el estribillo de una cancioncita de moda: “Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por ahí…” Cuando empezaron a circular los rumores sobre conspiraciones militares, el humor popular estableció la relación: el viejo e inofensivo *contrera* se convirtió en el peligroso *gorila*. Éstos, relativamente dispersos en el ejército, estaban mucho más cohesionados y dominantes en la marina. También se organizaron *comandos civiles* armados dispuestos a secundarlos, con la participación de militantes de los partidos políticos autodenominados “democráticos” (radicales, conservadores, socialistas, demócratas progresistas, demócratas cristianos) y de grupos nacionalistas.

Varias conspiraciones estaban en marcha en el ejército y la marina cuando el violento discurso de Perón del 31 de agosto –en el que anunció que por cada uno de sus partidarios caerían cinco de sus enemigos– pareció marcar el fin de la *pacificación*. La propuesta de la CGT, que ofreció al ministro de ejército su colaboración para combatir a los conspiradores, despertó el fantasma de las milicias obreras, algo muy temido por los militares porque suponía el peligro de la guerra civil.

En esas circunstancias, el 16 de septiembre de 1955, el general Eduardo A. Lonardi proclamó en Córdoba la “revolución libertadora”, mientras

el contralmirante Isaac F. Rojas asumía el mando de la flota de mar en marcha hacia el Río de la Plata. Aunque la mayor parte del ejército no participaba en el levantamiento, tampoco mostraba demasiada disposición a combatir a los insurrectos. El 20 de septiembre, luego de delegar el mando en una junta militar, Perón se refugió en la embajada de Paraguay ( “Ay, pobre Paraguay” , coreaban los manifestantes).

Terminaba así una de las experiencias políticas más importantes para los argentinos en el siglo XX. La década peronista había transformado el país económica, social y políticamente y dejaba un recuerdo que con los años se mostraría indeleble. Pero eso no se sabía en aquellos días, de ahí que el principal problema que se planteaba a los llamados “libertadores” era qué hacer con el peronismo.

### *“Ni vencedores ni vencidos”*

En principio, según la visión antiperonista de la realidad, el problema no parecía tan grave. Si se consideraba que la *dictadura* peronista se había basado en la represión de los opositores, el reparto de dádivas y prebendas entre sus partidarios y el monopolio de los medios de comunicación, era lógico pensar que, al perder el uso de esos instrumentos, el peronismo se desbandaría rápidamente. Esto sólo resultó cierto en el caso del partido, pero no en el de los sindicatos ni los barrios populares, donde permaneció sólidamente implantado.

Dos posiciones se delinearon entonces en las fuerzas armadas: nacionalistas y liberales. Antes de seguir, apuntemos que muchas palabras adquieren en la época un significado que no es el mismo que tienen en la actualidad, ni en el resto del mundo hispanohablante ni en idiomas extranjeros. Ya hemos dicho que “democracia” fue, en este contexto, proscripción de la mayoría. “Nacionalismo” significaba entonces, en términos generales, anti-liberalismo. Y “liberalismo” no era lo mismo que en Europa ni en los Estados Unidos, sino que aquí se traducía como anti-peronismo. Claro que esto no significa que todos los

*nacionalistas* fueran peronistas; Lonardi y el grupo que lo rodeaba son ejemplo de lo contrario. Es que la ideología *nacionalista* incluía otros aspectos: por ejemplo, la reivindicación de la raigambre hispánica como matriz esencial de la nacionalidad y del catolicismo como elemento fundamental de su esencia. Por eso, cuando Perón se enfrentó con la Iglesia, muchos de los que habían apoyado su ascenso al poder desde 1943 y su gobierno hasta 1954 pasaron a la oposición.

Para los *nacionalistas*, el peronismo tenía el mérito de haber inculcado a sus seguidores, durante diez años, una ideología *humanista y cristiana* (es decir, básicamente anticomunista) y de constituir así una barrera que impedía la difusión del comunismo en los medios obreros. El estado semi-corporativo que había establecido -en el que sindicatos, organizaciones patronales, fuerzas armadas, Iglesia (hasta la ruptura) sustituían de hecho a los partidos como actores políticos principales- no estaba muy lejos del que algunos de estos sectores *nacionalistas* consideraban ideal. Aseguraba el orden, la autoridad, la cohesión social, la unidad de la nación... todo lo contrario del estado liberal al que adhería, en cambio, una buena parte de la opinión católica.

Lo único que molestaba en este cuadro era Perón: personalista e imprevisible. Se trataba, entonces, de constituir una suerte de peronismo sin Perón, lo que implicaba mantener en pie tanto al PP como a la CGT para permitir luego su cooptación. Esta tendencia planteaba entonces el lema “Ni vencedores ni vencidos”, que retomaba el de Justo José de Urquiza después de la batalla de Caseros, en 1852.

Pero este proyecto se enfrentaba a varias dificultades. Por empezar, desde el exilio, Perón defendería su liderazgo único con uñas y dientes. En segundo lugar, los *nacionalistas* no disponían de ninguna figura capaz de reemplazarlo. Finalmente, los peronistas no aceptaban otro líder ( “Perón sí, otro no” ). El único partido político afín a estos grupos nacionalistas católicos, que se organizó en esos días, fue la Unión Federal (UF).

Los *liberales* pensaban que la cooptación de las organizaciones peronistas no era posible y que, para que pudiera funcionar un sistema democrático-liberal, era preciso eliminar por completo al peronismo, no sólo de las instituciones y de la competencia electoral, sino incluso de la memoria de los argentinos.

Esta era la posición predominante en la marina y en una parte del ejército; ellos eran los verdaderos *gorilas*. Contaban, además, con el apoyo de los partidos políticos “democráticos”: la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Demócrata (PD), el Partido Demócrata Progresista (PDP), el Partido Socialista (PS) y el recientemente creado Partido Demócrata Cristiano (PDC). Su lema: “Mayo, Caseros, Revolución Libertadora” .

El 23 de septiembre de 1955, Lonardi asumió la presidencia ante una multitud comparable a las que solía reunir Perón en la Plaza de Mayo, pero de distinta composición social y que esta vez gritaba “libertad”. Rodeado de nacionalistas católicos (como su asesor Clemente Villada Achával), formó su gobierno con ministros de las dos tendencias (Mario Amadeo, *nacionalista*, en el Ministerio de Relaciones Exteriores; Eduardo Busso, *liberal*, en el Ministerio del Interior) y no tomó ninguna medida contra el PP ni contra la CGT. Por ello, fue blanco de las críticas de los sectores *liberales* y de los partidos “democráticos”, que habían aceptado colaborar con el gobierno integrando una Junta Consultiva presidida por el contraalmirante Rojas. Finalmente, cuando Lonardi intentó reforzar el ala *nacionalista* de su gabinete con el nombramiento de un ministro de esa tendencia, los miembros de la Junta Consultiva renunciaron (“Rojas sí, nazis no”, coreaban sus partidarios) y el 13 de noviembre el presidente fue obligado a dimitir. El general Pedro Eugenio Aramburu, jefe del ala *liberal*, asumió la presidencia en su reemplazo, y Rojas continuó ejerciendo la vicepresidencia, fortalecido por la nueva situación.

La Junta Consultiva se reconstituyó, eliminando a los representantes de

la UF que no se habían solidarizado con los demás y reemplazándolos por miembros del PDC. El intento *nacionalista* había fracasado, llegaba la hora de la *desperonización*.

### *La desperonización*

El modelo era la *desnazificación* de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial: se trataba de eliminar totalmente el peronismo de la política y aun de la cabeza de los argentinos. La identidad política peronista debía disolverse y sus partidarios serían absorbidos por los partidos “democráticos”, que expresarían las distintas corrientes de opinión y competirían libremente por el gobierno en un sistema en el que la mayoría respetaría los derechos y libertades de las minorías.

Para este *lavado de cerebros*, el gobierno contaba con la casi totalidad de los medios de comunicación (radios, televisión, diarios, revistas) que permanecían en manos del estado. En la enseñanza secundaria, una nueva asignatura, *Educación democrática*, reemplazó a la que había difundido la propaganda peronista con el nombre de *Cultura ciudadana*. La propaganda antiperonista no fue menos masiva que la del *régimen depuesto*, pero su éxito fue menor.

Esta vez, la CGT reaccionó, proclamando un paro general por tiempo indeterminado. Pero ya era tarde: la central fue intervenida y sus principales dirigentes detenidos e inhabilitados; lo mismo se hizo con los sindicatos más importantes. Las dos ramas del PP (masculina y femenina) fueron disueltas, y quienes habían desempeñado cargos públicos durante el *régimen depuesto* fueron inhabilitados. Se prohibió todo tipo de propaganda peronista, incluyendo los símbolos del partido y los nombres de sus líderes históricos; para evitar mencionar a los innombrables, la prensa hablaba, por ejemplo, de “la segunda esposa del tirano prófugo”. El cadáver embalsamado de Evita fue secuestrado y

escondido en Europa, como para anular su poder simbólico.

Una junta de recuperación patrimonial investigó las cuentas y los bienes de los funcionarios peronistas y muchos fueron encausados por enriquecimiento ilícito. Los vestidos *haute-couture* y las joyas de Evita fueron exhibidos como prueba del lujo que había rodeado a la *abanderada de los humildes*. Incluso las relaciones de Perón con una adolescente de la UES se hicieron públicas. Sin embargo, nada de eso impresionaba a los destinatarios de esa propaganda, que respondían: “Puto y ladrón, lo queremos a Perón” .

De pronto, la comedia se transformó en drama: un grupo de oficiales retirados, suboficiales y civiles, dirigidos por el general Juan José Valle, intentó organizar un levantamiento. El 9 de junio de 1956, veintisiete presuntos implicados fueron fusilados: los militares (entre ellos, el general Valle), después de juicios sumarios, en establecimientos castrenses; los civiles, en forma clandestina, en los basurales de José León Suárez, inaugurando la práctica del terrorismo de estado. Hacía casi un siglo que no se aplicaba en Argentina la pena de muerte por razones políticas (con la excepción del anarquista Severino Di Giovanni), pero estos fusilamientos sólo fueron recibidos con horror por los peronistas, que, desde entonces, llamaron “fusiladora” a la revolución. En cambio, casi todos los “democráticos” coincidieron con la aprobación de Américo Ghioldi: “Se acabó la leche de la clemencia” . Poco después, *caños* (bombas artesanales) y sabotajes revelaban la actividad de una resistencia peronista. Catorce años más tarde, los fusilamientos de 1956 fueron uno de los cargos presentados por Montoneros para justificar la *ejecución* de Aramburu.

En marzo de 1957, se fugó del penal de Río Gallegos un grupo de presos políticos entre los que se contaban Héctor J. Cámpora (ex presidente de la Cámara de Diputados), José Espejo (ex secretario general de la CGT), Guillermo Patricio Kelly (dirigente de la Alianza Libertadora



Nacionalista), el empresario Jorge Antonio y el futuro inspirador del peronismo revolucionario, John William Cooke. Para otros cientos de peronistas, la “libertadora” significó años de prisión y de persecuciones.

### *Volver al campo*

En cuanto a la situación económica, Lonardi había encargado a Raúl Prebisch, prestigioso secretario general de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Naciones Unidas, un estudio, del que pronto presentó un informe preliminar. Este señalaba, como principal problema, el cuello de botella del sector externo: el valor de las exportaciones era insuficiente para adquirir los insumos necesarios para la industria. La culpa se atribuía al *régimen depuesto*, que había desalentado la producción agropecuaria utilizando las divisas generadas por las exportaciones para financiar al sector industrial; dilapidado las reservas de oro y divisas en la repatriación de la deuda externa y las nacionalizaciones y favorecido a la industria liviana a expensas de la producción de energía y de la industria pesada. El otro problema que este informe detectaba era la inflación, consecuencia de la política monetaria y salarial expansiva, el déficit fiscal y la emisión para cubrirlo.

Las propuestas incluían entonces una serie de medidas para estimular la producción agropecuaria y las exportaciones tradicionales; otras, destinadas a reducir el gasto público (racionalización de la administración, privatización de empresas públicas, eliminación de subsidios). Recomendaba también recurrir al capital extranjero, en forma de inversiones directas o de créditos, y reducir la intervención del estado en la economía y las excesivas reglamentaciones que pesaban sobre esa actividad.

Algunas de estas recomendaciones fueron puestas en práctica: devaluación del peso; unificación del tipo de cambio y fluctuación en

un mercado libre; adhesión al FMI y al Banco Mundial. Las medidas favorables al agro (tipo de cambio elevado, escasa imposición a las exportaciones) eran criticadas por los sectores industrialistas, que acusaban al gobierno de pretender retornar a una economía agro-exportadora (las caricaturas de la época representaban a Aramburu como una vaca). Pero no hubo una política económica coherente ni continuada: en tres años se sucedieron cuatro ministros de economía.

En cambio, sí se avanzó decididamente en la recuperación de la *disciplina* laboral. Con la disolución de las comisiones internas y con el apoyo del estado, patrones y gerentes pudieron afirmar su autoridad en los lugares de trabajo y *racionalizar* los procesos productivos, aumentando la intensidad del trabajo y despidiendo personal. Esos despidos solían ser selectivos y afectaban a los delegados más activos, considerados como obstáculos a la productividad, en un clima de revancha patronal. La suspensión de los convenios colectivos, por su parte, significó una caída del salario real que disminuía el coste del trabajo. Multitud de huelgas se convocaban para protestar contra este deterioro pero, con los sindicatos intervenidos y el apoyo del estado a los patrones, pocas tenían éxito. Todo eso reforzó la identificación de la clase obrera con el peronismo: los hechos eran más elocuentes que la propaganda oficial.

En septiembre de 1957, se intentó la normalización de la CGT, pero el Congreso normalizador mostró una profunda división del movimiento obrero, paralela a la que atravesaba al conjunto de la sociedad. Por un lado, los *32 gremios democráticos*, antiperonistas, recuperados muchos de ellos por sus antiguos dirigentes socialistas; por otro, las *62 organizaciones peronistas*, que incluían a los sindicatos más importantes. Inhabilitados los antiguos dirigentes -y poco preparados para gestionar una situación tan conflictiva con el gobierno- una nueva capa de sindicalistas comenzaba a emerger: sus figuras más representativas serían José Alonso de la Asociación Obrera Textil (AOT) y Augusto T. Vandor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

En ese contexto, aumentaron las tensiones dentro de las fuerzas armadas alrededor de la fijación de un cronograma para la salida electoral. La enigmática frase de Aramburu, “Ni un minuto antes ni uno después”, ya no bastaba. La marina y los sectores más *gorilas* del ejército no querían llamar a elecciones antes de terminar la *desperonización*, eran denominados *quedantistas*. La mayoría del ejército, temiendo las divisiones internas que producía la permanencia en el poder, prefería hacerlo cuanto antes. Pero: ¿a quién se le entregaría el poder?

Para algunos, sólo debía entregarse el poder a un partido político que se identificara con la “revolución libertadora”: eran los *continuistas*; otros pensaban que debía entregarse a quienquiera ganara las elecciones y que el ejército debía retirarse del terreno político: eran los *profesionalistas*. El debate no era abstracto, porque se refería a los partidos que podían obtener realmente la mayoría electoral: las dos fracciones en que se había dividido la UCR: la UCR del Pueblo (UCRP), próxima al gobierno, y la UCR Intransigente (UCRI), que se oponía a su política económica y a la *desperonización*. También se habían dividido los conservadores en un Partido Demócrata Nacional (PDN), antiperonista, y un Partido Conservador Popular (PCP, Vicente Solano Lima) próximo al peronismo. El PS se escindió en un PS Democrático (PSD, antiperonista, Américo Ghioldi) y un PS Argentino (PSA, Alfredo Palacios, que trataba de recuperar la confianza de los trabajadores).

En este contexto, para saber a qué atenerse en cuanto al peso relativo de estas fuerzas políticas, el gobierno *de facto* decidió convocar a elecciones para reunir una convención constituyente, antes de las elecciones presidenciales.

### *El recuento globular*

La reunión de una convención no era, en realidad, indispensable. El gobierno había derogado por decreto la constitución de 1949 y pocos

pensaban introducir modificaciones sustanciales a la de 1853. Pero la elección de julio de 1957 sirvió para despejar las incógnitas en cuanto al panorama político real, por eso se habló de un *recuento globular*. Para que fuera más preciso (y para aumentar la representación de los pequeños partidos) se estableció un sistema de representación proporcional. No hubo grandes sorpresas: el peronismo, pese a no disponer de ninguna estructura organizativa ni de medios de difusión, obtuvo más de dos millones de votos en blanco, el 24 por ciento del padrón electoral. Si a ello se le suman casi un millón de abstenciones -lo que, por cierto, es discutible- llegaría al 35 por ciento. Seguía siendo, pues, la primera minoría.

Los dos partidos radicales obtenían porcentajes más o menos similares (UCRP 24 por ciento, UCRI 21 por ciento) y el 30 por ciento restante se dividía entre los otros partidos “democráticos” (18% del padrón), el partido comunista (PC), la UF, y una treintena de pequeños partidos.

La convención constituyente no llegó a funcionar mucho tiempo: al retirarse los convencionales de la UCRI -que no reconocían su legitimidad-, y luego los sabattinistas y conservadores, quedó sin quórum para sesionar. La actividad política se concentró entonces en la preparación de las elecciones presidenciales, convocadas para el 24 de febrero de 1958.

El *recuento* había demostrado que ningún partido alcanzaba, en forma aislada, una mayoría suficiente. Las alianzas políticas -que Yrigoyen había bautizado *contubernio*- recordaban demasiado a las de la *década infame*, igualmente condenada por peronistas y radicales. Ambas fracciones de la UCR eran dirigidas por miembros de la tendencia denominada *intransigente*, particularmente hostil a las alianzas extra-partidarias. No había muchas alternativas: ganaría las presidenciales quien obtuviera el voto peronista. Tampoco en esto había muchas posibilidades: el único candidato que podía pretenderlo era Frondizi.

Líder del Movimiento de Intransigencia y Renovación y presidente del

comité nacional de la UCR desde 1954, Frondizi había dirigido la oposición al peronismo, básicamente en el ámbito parlamentario. Joven y brillante intelectual, representaba la tradición más progresista del radicalismo (el programa de Avellaneda de 1945), cuyas ideas y estilo había modernizado considerablemente.

Pero todo esto despertaba también reacciones contrarias, no sólo del sector *unionista*, minoritario en el partido, sino también entre los sabattinistas e incluso dentro de su propia tendencia, por ejemplo, Ricardo Balbín en la provincia de Buenos Aires. La proclamación de su candidatura presidencial por la convención nacional en noviembre de 1956 precipitó la división. Desde entonces, las dos UCR se fueron diferenciando, principalmente, debido a sus posiciones frente al gobierno. Mientras la UCRP, dirigida por Balbín, apoyaba en términos generales la política *liberal* (el ministro del Interior pertenecía a este partido), la UCRI adoptaba progresivamente actitudes cada vez más críticas frente a la política económica y la proscripción del peronismo. Eso le permitiría acercarse a los dirigentes peronistas y facilitaría el camino de la negociación.

En esa negociación, tanto Frondizi como Perón tenían algo que ofrecer y algo que ganar. Perón podía ofrecer dos millones de votos; Frondizi, la posibilidad de llegar al gobierno en las condiciones impuestas por la “libertadora”. Pagaría esos votos prestados con la legalización del partido y la devolución de los sindicatos. El pacto, negociado por Rogelio Frigerio y John W. Cooke y mantenido secreto, permitió el triunfo de Frondizi pero se convirtió, también, en el principal problema que debió enfrentar su gobierno.

### *Los vencedores vencidos*

Es el título de un libro sobre la “revolución libertadora” que expresa cabalmente el sentimiento de sus partidarios ante el triunfo de Frondizi, que era también el triunfo de Perón. El fracaso de estos

“libertadores” en su objetivo principal -eliminar el peronismo- determinaría en gran medida la evolución política de las décadas siguientes.

Algo parecido había ocurrido en 1930. El ejército, dirigido por el general José F. Uriburu, había intentado entonces eliminar la supuesta *demagogia* yrigoyenista, sustituyendo el sistema democrático-liberal por un sistema corporativo. Al fracasar, debió ceder el poder a los partidos liberales conservadores, que sólo pudieron evitar el retorno de la *demagogia* recurriendo al *fraude patriótico* durante todo el decenio.

Sólo el régimen militar de 1943 a 1946 había logrado introducir cambios duraderos en el sistema político y asegurar su continuidad mediante el triunfo electoral. Pero el artífice de ese éxito había sido Perón, y no había ningún Perón entre los “libertadores” .

































































































































































































































































































































































































































































